



## AUSTRALIA: INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS

### AMNISTÍA INTERNACIONAL: PRESENTACIÓN A LA 51.ª SESIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DEL EPU, 19-30 DE ENERO DE 2026

#### RESUMEN

Este informe se preparó para el Examen Periódico Universal (EPU) de Australia (enero de 2026). En ella, Amnistía Internacional evalúa la aplicación de las recomendaciones formuladas a Australia en su anterior examen, centrándose en los derechos de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres —en particular los niños—, así como en los refugiados, las personas que solicitan asilo y la libertad de reunión. Destaca la urgente necesidad de una ley de derechos humanos que proporcione una protección integral a todas las personas en Australia. En cuanto a la situación de los derechos humanos sobre el terreno, Amnistía Internacional expresa su profunda preocupación por la baja edad de responsabilidad penal, el uso de prácticas crueles en los centros de detención de menores, la detención en alta mar, la difícil situación de las personas atrapadas en el sistema de «vía rápida», las crecientes restricciones al derecho de protesta y la aprobación de proyectos de combustibles fósiles a pesar de la crisis climática. El informe concluye con recomendaciones al Gobierno australiano que, de ser adoptadas, reforzarían la protección de los derechos humanos en todo el país.

#### SEGUIMIENTO DE LA REVISIÓN ANTERIOR

1. Australia aceptó 126 de las 344 recomendaciones del Examen Periódico Universal de 2021 y tomó nota de 218.
2. Amnistía Internacional celebra algunos avances desde el último examen, como la residencia permanente para los refugiados que llegaron en barco antes de 2013, la negociación de un acuerdo y la facilitación del reasentamiento de refugiados en Nueva Zelanda, y el establecimiento permanente del Programa Piloto de Integración y Asentamiento de Refugiados en la Comunidad. Una ley de 2022 también reforzó la independencia de la Comisión Australiana de Derechos Humanos.
3. Sin embargo, Amnistía Internacional sigue preocupada por la situación de los derechos humanos en Australia.
4. A pesar de apoyar las recomendaciones, Australia no ha aplicado plenamente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP).
5. Las restricciones desproporcionadas a las protestas pacíficas han aumentado a pesar de apoyar las recomendaciones para poner fin a la violación de la libertad de reunión pacífica.
6. La edad mínima de responsabilidad penal sigue estando por debajo de las normas internacionales.
7. Australia sigue deteniendo a personas que solicitan asilo, incluso en alta mar.

8. Tampoco ha adoptado una ley nacional de derechos humanos para incorporar sus obligaciones internacionales al derecho interno.

## **EL MARCO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS**

9. Los derechos humanos en Australia están protegidos por un conjunto fragmentado de leyes, la Constitución y el derecho consuetudinario, y muchos derechos aún no están codificados.

10. Si bien Australia ha ratificado siete tratados internacionales fundamentales de derechos humanos, no los ha incorporado a su legislación nacional mediante una ley de derechos humanos.

11. En 2022, el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) suspendió su visita a Australia tras habersele denegado el acceso a algunos centros de detención en Queensland y Nueva Gales del Sur (NSW).

12. Australia no cumplió con el plazo de 2023 para implementar el OPCAT.<sup>11</sup> Aunque Queensland aprobó posteriormente leyes para permitir las visitas a determinadas instalaciones, y a pesar de apoyar las recomendaciones para establecer organismos del Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), Queensland, Nueva Gales del Sur y Victoria aún no han establecido dichos organismos.

## **LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE EL TERRENO**

### **Pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres**

13. El Gobierno federal no ha incorporado la UNDRIP a la legislación, ni ha elaborado un plan de acción nacional, ni ha revisado sus leyes para verificar su conformidad, aunque algunos estados y territorios han incorporado los principios de la UNDRIP en sus leyes de derechos humanos.

14. Tras la Declaración de Uluru desde el Corazón, la mayoría de los estados y territorios iniciaron conversaciones sobre un tratado con los pueblos de las Primeras Naciones. Victoria y Queensland hicieron referencia a la UNDRIP en su compromiso; Victoria completó su informe de la Comisión de Justicia Yoorrook en junio de 2025 y comenzó las negociaciones del tratado.

15. Sin embargo, Queensland descartó su investigación para descubrir la verdad y derogó su Ley del Camino hacia el Tratado después de que fracasara el referéndum sobre la Voz. No existe un tratado federal ni un proceso para descubrir la verdad.

16. El informe Closing the Gap de 2024 muestra un empeoramiento de los resultados en cuatro áreas clave, entre ellas los niños en acogida fuera del hogar, las tasas de suicidio y el encarcelamiento de adultos. De los 15 objetivos socioeconómicos, solo cinco están en camino de alcanzarse.

17. Cabe destacar que las tasas de encarcelamiento de los adultos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres eran 15,2 veces superiores a las de los adultos no indígenas.

18. Los australianos votaron en contra de una propuesta de enmienda constitucional para crear la Voz de los Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres, un organismo que habría asesorado al Parlamento sobre cuestiones que afectan a los pueblos originarios.

19. Los pueblos originarios siguen estando gravemente sobrerrepresentados en las cárceles.

22 En junio de 2025, 582 miembros de los pueblos originarios habían fallecido bajo custodia desde la Comisión Real de Investigación sobre las Muertes de Aborígenes bajo Custodia (RCIADIC) de 1991, sin que nadie haya rendido cuentas por ello.

20. Un informe de las Naciones Unidas de 2023 alertó sobre el elevado número de personas en prisión preventiva, señalando que las condiciones de la libertad bajo fianza afectan de manera desproporcionada a los pueblos originarios. Se citaban la excesiva presencia policial, la discriminación y la falta de estrategias de prevención del delito basadas en las necesidades.

21. En 2022-23, el Gobierno se comprometió a reinvertir en justicia y a poner en marcha programas de desviación dirigidos por las Primeras Naciones. En 2023 se comenzó a informar en tiempo real sobre las muertes de indígenas bajo custodia, junto con un nuevo plan para reducir la violencia contra las mujeres y los niños aborígenes.

22. A pesar de estas medidas, los abusos persisten. En 2024, los indígenas representaban casi el 25 % de todas las muertes bajo custodia, aunque solo constituían el 3,8 % de la población. Los avances en las reformas clave siguen siendo lentos e insuficientes.

23. Australia no está cumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de trato de los niños en el sistema penal. Las duras condiciones de libertad bajo fianza, las condenas y las leyes que establecen una edad mínima de responsabilidad penal muy baja han aumentado la sobrerrepresentación de los niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres.

24. Amnistía Internacional está preocupada por la detención de niños en centros para adultos, las prácticas que equivalen a tortura y otros malos tratos, y la suspensión de las protecciones legales que permiten que esto ocurra. Estas prácticas afectan de manera desproporcionada a los niños vulnerables.

25. Australia sigue penalizando y deteniendo a niños de tan solo 10 años, a pesar de los repetidos llamamientos de los organismos de las Naciones Unidas para que se eleve la edad mínima de responsabilidad penal a 14 años. En el anterior EPU, Australia no aceptó las recomendaciones de elevar la edad.

26. Queensland introdujo penas más severas para los menores en el marco de las políticas de «delitos de adultos, penas de adultos», lo que afectó de manera desproporcionada a los niños indígenas.

27. En 2023, Queensland suspendió su Ley de Derechos Humanos para aprobar una legislación que penaliza el incumplimiento de la libertad bajo fianza para los menores —un delito de adultos—, lo que provocó un aumento de las detenciones de menores.

28. En Victoria, el Gobierno eliminó la salvaguardia de que la prisión preventiva solo se utilizara como último recurso para los niños e introdujo nuevos delitos para encarcelar a los niños por incumplir las condiciones de la libertad bajo fianza. Es probable que esto aumente significativamente el encarcelamiento de niños.

29. Nueva Gales del Sur y Australia Meridional están tomando medidas para aplicar «medidas punitivas desacreditadas» similares. En 2024, el Territorio del Norte promulgó leyes sobre la libertad bajo fianza que eliminaban las presunciones a favor de la libertad bajo fianza y restablecían el incumplimiento de la libertad bajo fianza como delito juvenil. En 2025, el Territorio del Norte modificó la Ley de Justicia Juvenil de 2005, eliminando los principios de protección de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN). Esto aumentará la reincidencia y tendrá un impacto devastador en los niños.

30. En Queensland y Australia Occidental, los niños están reclusos en prisiones para adultos, lo que los expone a daños y aumenta su riesgo de reincidencia, lo que incumple las obligaciones internacionales de Australia.

31. En toda Australia, especialmente en Queensland, se sigue utilizando las comisarías para detener a menores.

32. Queensland volvió a suspender su Ley de Derechos Humanos en agosto de 2023, permitiendo la detención indefinida de menores en centros de detención para adultos, al tiempo que reconocía que las leyes violaban los derechos recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales.

33. En 2022, 17 chicos del centro de detención juvenil Banksia Hill, en Australia Occidental, fueron trasladados a la prisión para adultos Casuarina, donde se denunciaron incidentes de autolesiones. Se produjo un aumento similar de las autolesiones en el centro de detención juvenil Don Dale, en el Territorio del Norte.

34. Una inspección oficial reveló que Banksia Hill fallaba en todos los ámbitos, poniendo en peligro la salud y la seguridad de los detenidos. Un niño aborigen de 16 años murió tras un intento de suicidio.

35. En 2024, el Territorio del Norte reintrodujo las capuchas antisputo (un dispositivo de inmovilización destinado a impedir que una persona escupa o muerda) para los niños, una práctica condenada por la Comisión Real y los expertos en derechos humanos por considerarla tortura u otro trato cruel, inhumano o degradante.

36. En toda Australia, especialmente en Queensland, los niños se han enfrentado a un aislamiento prolongado. Los informes revelan el uso continuado de jaulas policiales en los traslados. Estas prácticas son degradantes para los niños y les causan graves daños físicos y psicológicos, además de violar las obligaciones de Australia en virtud de la Convención contra la Tortura y otros tratados.

37. En 2024, en Australia Occidental, tres niños aborígenes murieron en el sistema de detención de menores.

38. En 2023, durante una investigación oficial surgieron denuncias de abusos sexuales y físicos contra niños en el centro de detención de menores Ashley, en Tasmania, lo que provocó llamamientos para el cierre inmediato del centro, que sigue abierto.

## **Refugiados, solicitantes de asilo y migrantes**

39. A pesar de la condena generalizada y las pruebas de los daños causados, Australia sigue aplicando su política ilegal de tramitación extraterritorial, que incluye el traslado de los solicitantes de asilo a Nauru y la detención indefinida de inmigrantes en el territorio nacional.

40. A pesar de la condena generalizada y las pruebas de los daños causados, Australia sigue aplicando su política ilegal de tramitación extraterritorial, que incluye el traslado de los solicitantes de asilo a Nauru y la detención indefinida de inmigrantes en el territorio nacional. El Gobierno respondió con leyes de emergencia que imponían toques de queda y dispositivos de rastreo a los liberados.

41. Sin embargo, decisiones posteriores del Tribunal Superior sostuvieron que la detención prolongada o indefinida es legal cuando tiene un propósito legítimo.

42. A finales de 2024, las nuevas leyes de migración restringieron aún más los derechos de los refugiados, incluida la re-detención de aquellos que representaban un riesgo de cometer delitos graves.

43. En febrero de 2025, el Gobierno anunció planes para trasladar a tres personas a Nauru en virtud del nuevo acuerdo, lo que suscitó graves preocupaciones en materia de derechos humanos.

44. La política australiana de «tramitación» y detención en el extranjero constituye una clara violación del derecho internacional. En su tercer EPU, muchos países pidieron a Australia que pusiera fin a la «tramitación» en el extranjero y a la detención obligatoria de los refugiados. Otros pidieron que las políticas fronterizas y de detención de Australia se ajustaran a los derechos humanos internacionales.

45. En febrero de 2025, había 93 refugiados y solicitantes de asilo en Nauru, muchos de ellos con graves problemas de salud. Los defensores de los derechos humanos piden que se reintroduzca una ley que permita la evacuación médica.

46. Aunque el procesamiento extraterritorial en Papúa Nueva Guinea (PNG) finalizó en 2021, más de 30 hombres siguen allí después de 11 años, sin poder entrar en Australia. Sufren problemas de salud mental y física y carecen de acceso a los derechos humanos básicos, mientras que Australia niega su responsabilidad por su bienestar.

47. Aproximadamente 7000 personas afectadas por el defectuoso sistema «Fast Track» siguen en una situación de incertidumbre. Han vivido durante más de una década con visados puente de seis meses, sin acceso a la educación terciaria, sin poder viajar ni reunirse con sus familias, con derechos laborales precarios y sin poder solicitar visados permanentes. Debido a la temporalidad indefinida, el grupo se ha visto afectado por suicidios.

48. El Gobierno está estudiando vías para resolver la situación de algunas personas. Sin embargo, el proceso es lento y no existe una vía para la permanencia de todo el grupo.

49. Australia sigue discriminando a las personas que solicitan asilo en función de su modo de llegada.

50. Las leyes de migración introducidas a finales de 2024 entrañan el riesgo de devolución, al permitir las deportaciones a terceros países que no son parte en la Convención sobre los Refugiados, sin garantías de protección de los derechos humanos ni de seguridad frente a la persecución, a pesar de las recomendaciones en sentido contrario.

51. En abril de 2025, más de 1070 personas se encontraban detenidas por motivos de inmigración en Australia, con una estancia media de 456 días.

## **Libertad de reunión y asociación**

52. Australia apoyó las recomendaciones para poner fin a las violaciones del derecho a la libertad de reunión; sin embargo, la represión de este derecho se ha intensificado desde la última revisión.

53. Las leyes de varias jurisdicciones restringen de manera desproporcionada la libertad de expresión y de reunión, imponiendo duras penas de hasta dos años de prisión y multas de hasta 50 000 dólares australianos por protestas pacíficas.

54. La Ley de Modificación de la Legislación sobre Carreteras y Delitos de 2022 en Nueva Gales del Sur tipifica como delito los daños u obstrucciones a infraestructuras clave, con penas de hasta dos años de prisión y multas de hasta 22 000 dólares australianos por protestar sin permiso.

55. Cientos de manifestantes pacíficos por el clima han sido detenidos y, cada vez más, condenados a penas de prisión. La policía ha tratado de prohibir las protestas a favor de Palestina, violando las obligaciones de defender la libertad de expresión y de reunión.

56. Las universidades han restringido las protestas en los campus en apoyo a los palestinos, exigiendo permisos, prohibiendo las protestas en interiores y vigilando a los estudiantes, utilizando las pruebas en audiencias por conducta indebida.

## **Cambio climático**

57. Los efectos del cambio climático suponen una amenaza cada vez mayor para los derechos humanos. El Gobierno australiano ha sido advertido de forma explícita y repetida sobre las repercusiones del cambio climático en los derechos humanos, en particular en los niños, las naciones insulares del Pacífico y los pueblos originarios de Australia.

58. En 2022, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas determinó que el Gobierno australiano no había protegido adecuadamente a los pueblos isleños del Estrecho de Torres de los efectos del cambio climático.

59. El 15 de julio de 2025, el Tribunal Federal desestimó un caso histórico en el que se argumentaba que el Gobierno australiano había incumplido su deber de proteger a las islas del Estrecho de Torres del cambio climático.

60. Australia ha seguido aprobando proyectos de combustibles fósiles, incluida la ampliación de la vida útil de su mayor proyecto hasta 2070.

61. No ha cumplido con sus obligaciones en virtud del Acuerdo de París de apoyar a los países de bajos ingresos en la lucha contra el cambio climático y hacer frente a las pérdidas y daños, ni de proteger a sus propios ciudadanos.

62. El objetivo de reducción de emisiones de Australia para 2030 está muy por debajo del nivel de esfuerzo necesario para limitar el calentamiento a 1,5 °C. En el momento de redactar este informe, Australia aún no ha fijado un objetivo de reducción de emisiones para 2035.

## **Exportaciones de armas y derechos humanos**

63. El sistema de exportación de material de defensa de Australia sigue siendo muy opaco, lo que suscita serias preocupaciones sobre el cumplimiento del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) y la legislación nacional sobre control de armas.

64. Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por la posible reventa de armas, componentes y municiones fabricados en Australia al ejército israelí, ya sea directamente o a través de terceros países.

65. Thales Australia, que fabrica TNT para proyectiles de artillería de 155 mm en Benalla, Victoria, así como proyectiles M795 de 155 mm completos, probablemente los suministra a los Estados Unidos mediante permisos de exportación de defensa aprobados. Sin embargo, debido a la opacidad del sistema de exportación de defensa de Australia, esto es difícil de confirmar. A pesar de esta necesidad de aclaración, en diciembre de 2023 se aprobó un permiso de exportación reciente de 147,5 millones de dólares de Estados Unidos a Israel para proyectiles de 155 mm. Parte de este permiso correspondía a proyectiles M795 de 155 mm, que son del mismo tipo que los fabricados por Thales en Benalla, lo que significa que las fuerzas militares israelíes podrían estar utilizando munición fabricada en Australia en Gaza.

66. La presencia de componentes de fabricación australiana en sistemas que se exportan a Israel, incluidos los destinados a los aviones de combate F-35 utilizados en los ataques aéreos israelíes, también suscita preocupación por el riesgo de que Australia sea cómplice de graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

## RECOMENDACIONES PARA LA ACTUACIÓN DEL ESTADO OBJETO DE EXAMEN

### Amnistía Internacional insta al Gobierno de Australia a:

67. Aplique una Ley de Derechos Humanos, tal y como se recomendó anteriormente.
68. Desarrolle un Marco Nacional de Derechos Humanos, revise y modifique las leyes existentes para que sean compatibles con los derechos humanos, e introduzca un índice de indicadores de derechos humanos y procesos de supervisión.
69. Garantice que Queensland, Nueva Gales del Sur y Victoria establezcan o designen organismos del MNP, tal y como Australia se comprometió a hacer en la revisión anterior, y financie suficientemente dichos organismos.
70. Ratifique sin reservas todos los tratados de derechos humanos y protocolos facultativos en los que Australia no es parte, y retire todas las reservas y declaraciones existentes.
71. Garantice que todos los gobiernos apliquen plenamente las recomendaciones de la RCIADIC.
72. Garantice que todas las muertes bajo custodia se investiguen de manera rápida, imparcial, exhaustiva, eficaz e independiente, y que los organismos de investigación independientes cuenten con la financiación adecuada para tal fin.
73. Financie las iniciativas existentes y nuevas para cumplir los objetivos de «Closing the Gap», en particular las tasas de encarcelamiento y suicidio entre los pueblos de las Primeras Naciones, la violencia contra las mujeres y los niños de las Primeras Naciones y la sobrerrepresentación de los niños de las Primeras Naciones en el cuidado fuera del hogar, tal y como se comprometió en la revisión anterior.
74. Aumente la edad mínima de responsabilidad penal a al menos 14 años, de conformidad con las normas internacionales, tal y como se recomendó anteriormente.
75. Prohíba el uso de centros de detención y prisiones para adultos para niños en cualquier circunstancia.
76. Abolir el uso de prácticas que constituyan tortura o trato cruel, inhumano o degradante de los niños en todos los entornos judiciales y garantizar que todas las formas de transporte y restricción de los niños respeten su dignidad y seguridad.
77. Financiar programas de desviación dirigidos por indígenas y basados en la comunidad como alternativas a la detención, tal y como se recomendó anteriormente.
78. Reforzar las protecciones previstas en la legislación sobre derechos humanos y evitar su suspensión en el contexto de la justicia juvenil.
79. Poner fin al «procesamiento» y la detención en el extranjero, tal y como se recomendó anteriormente, y permitir que los refugiados y solicitantes de asilo enviados a Nauru y Papúa Nueva Guinea se establezcan en Australia.
80. Aprobar inmediatamente una ley que permita la evacuación médica desde lugares situados en el extranjero para recibir tratamiento en Australia.
81. Poner fin a la protección temporal y abrir vías hacia la permanencia, incluyendo la concesión de la permanencia a quienes están sujetos al sistema de vía rápida y a quienes huyen de zonas de guerra con visados temporales por motivos humanitarios.
82. Derogar las leyes que restringen de manera desproporcionada los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.

83. Garantizar que el uso de armas menos letales en la vigilancia de las reuniones públicas se ajuste plenamente al derecho internacional y a las normas internacionales sobre el uso de la fuerza.
84. Detener inmediatamente todos los nuevos proyectos de carbón y gas y asumir un compromiso con plazos concretos para eliminar por completo la producción y la exportación de combustibles fósiles.
85. Aumentar el objetivo de reducción de emisiones de Australia para 2030 a cero neto para 2030, en consonancia con la reciente recomendación del Relator Especial sobre el Cambio Climático.
86. Acelerar el desarrollo de energías renovables, el almacenamiento, la electrificación y la eficiencia energética que respeten los derechos humanos, con políticas y programas que sean equitativos, inclusivos y defiendan la autodeterminación de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres.
87. Contribuir con su parte correspondiente a la financiación climática, especialmente para la adaptación, y contribuir a los mecanismos para hacer frente a las pérdidas y daños, como el Fondo para Responder a las Pérdidas y Daños.
88. Desarrollar un Plan Nacional de Adaptación sólido y totalmente financiado, que incluya un mayor apoyo a la adaptación y el fomento de la resiliencia impulsados por la comunidad.
89. Apoyar un embargo internacional integral de armas contra Israel y los grupos armados palestinos, hasta que existan mecanismos eficaces que garanticen que las armas no se utilizarán para cometer o facilitar violaciones graves de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario; que las presuntas violaciones se investiguen de manera exhaustiva e imparcial; y que se ponga fin a la impunidad de los abusos cometidos en el pasado y en el presente.
90. Suspender todas las licencias de exportación de armas a los Estados Unidos y otros países, a menos que se proporcionen garantías de uso final legalmente vinculantes y verificadas de forma independiente que aseguren que estos artículos no se reexportarán a Israel.
91. Adoptar un sistema nacional de control transparente que proporcione la mayor cantidad posible de información actualizada y accesible al público sobre la cantidad, el tipo, el valor en dólares, el destino final, el usuario final y el uso final de todo el equipo y las municiones militares y de doble uso, incluidas las piezas.
92. Apoyar una investigación parlamentaria sobre las exportaciones de defensa de Australia y su papel en posibles violaciones del derecho internacional.